

proyecto antes de cualquier carga fiscal. Lo anterior, da un resultado muy distante: en realidad, la participación del Estado en la riqueza que genera la actividad minera oscilará entre 50% y 80%, en función del tipo de mineral (oro o carbón) y del tipo de mina (subterránea o a cielo abierto). Es decir, en realidad, de \$100 que genera la industria minera entre \$50 y \$80 son trasladados a la Nación.

**10** No es cierto que el sector deduce más en beneficios de lo que paga en impuestos: las cuentas claras dicen que lo que se ha llamado beneficio o bien no lo es, o si fue un incentivo de la política fiscal, no fue exclusivo para el sector minero. Además, el sector minero (sin hidrocarburos) no fue el principal usuario de la deducción por inversión en activos fijos, incentivo tributario ampliamente utilizado por la mayoría de las industrias en un momento en el que Colombia no aparecía en ningún radar de ningún inversionista. A pesar de lo anterior, se evidencia en las gráficas del propio informe, que la tributación efectiva del sector minero es 2 ó 3 veces mayor a la tributación promedio del país. No se explica porqué se insiste reiteradamente en lo contrario.

**11** Es importante que el país se entere de que los encadenamientos generados por el sector minero (evidenciados claramente por los estudios arriba mencionados), son una gran oportunidad. No es cierto que el sector minero “no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente la economía”. Por el contrario, diría Fedesarrollo, “el sector minero jalona fuertemente el empleo indirecto a través de sus encadenamientos con otros sectores. De los \$19.5 billones de producción total (carbón, minerales metálicos y minerales no metálicos), el 27% equivale a consumo intermedio, el cual dinamiza fuertemente los sectores de construcción, obras civiles y transporte, entre otros”. Por cada \$100 de valor de la producción del sector minero, otras ramas proveedoras de la industria generan \$240 pesos adicionales.

**12** Justo habría sido reconocerlos importantes avances logrados en materia de fortalecimiento de la institucionalidad minera. Son un progre-

so: la creación del Viceministerio de Minas, de la ANM, de la ANLA; la recogida de la mayoría de las competencias delegadas en las Secretarías de minas; la especialización del Servicio Geológico Colombiano en el conocimiento geológico; la implementación de planes de choque en materia de registro catastral, seguridad industrial, licencias y consultas previas; la contratación de firmas especializadas para la fiscalización integral; la declaratoria de 11 minerales estratégicos y de 25 millones de hectáreas en áreas de reserva estratégica; el desarrollo del plan de formalización; y la decidida lucha contra la minería ilegal. Por supuesto, todos deseábamos que esta nueva institucionalidad estuviese operando al 100% desde hace años. Pero estamos convencidos de que la eficiencia administrativa del sector, está siendo impactada de manera positiva con la entrada en funcionamiento pleno de la nueva institucionalidad.

**13** En materia de derechos humanos, el informe hace señalamientos generalizadores, hipotéticos y sin sustentar: “sin una estricta observancia de los derechos y condiciones laborales para los trabajadores vinculados a la producción mineroenergética... se generarían condiciones propicias para la reproducción de sobre ganancias a favor de los capitales y en detrimento de los trabajadores nacionales”; (...) “se auspiciarían situaciones sociales inaceptables por su inequidad”. “Por regla general, las actividades mineras están vulnerando derechos fundamentales y colectivos...”. “La presencia de complejos mineros... puede... generar nuevos conflictos de pérdida de los derechos constitucionales e imposibilidades para que las poblaciones puedan disfrutar de una vida digna. “De lo anterior puede desprenderse que la minería a gran escala, al ser un factor subyacente del conflicto armado en sentido amplio y situarse como una de las principales causas del desplazamiento forzado, está inmerso en el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional...”. Grave... muy grave este tipo de aseveraciones lanzadas al viento sin ningún respaldo concreto.

**14** Para sustentar la amenaza de la minería sobre los derechos a la tierra, no se utilizan de manera

exacta las cifras de títulos en varios sentidos: se confunde un título con una actividad minera; se desconocen los dobles registros que existen en los títulos; y no se entienden afirmaciones como que 2,1 millones de hectáreas se dedican a la minería y luego se afirma que 40 millones de hectáreas están amenazadas por la minería. La confusión es total: en realidad, el índice de éxito minero sobre las áreas de la exploración minera es de menos del 1%, en concreto 1 de cada 1.000 áreas se convierte en un proyecto exitoso. En consecuencia, el traslape entre las solicitudes de exploración y la frontera agrícola o el tamaño de los municipios, es inexacto, pues no tiene en cuenta esta probabilidad, verdad sabida en la industria minera mundial.

**15** Distorsionar el concepto de zonas de consolidación integral del gobierno, es motivo igualmente de gran preocupación: hacerlas aparecer como zonas de guerra cuando son zonas donde se ha recuperado el orden público y se trata de llevar a la institucionalidad y los programas sociales, mostrarlas como zonas de interés para inversionistas cuando el criterio es el de erradicación de la violencia, y presentarlas como zonas de desplazamiento cuando lo que se busca con la consolidación integral es el retorno, no es precisamente una reflexión académica que pretenda informar imparcialmente a la opinión.

En fin, 15 comentarios iniciales sobre un trabajo que, voluntariamente o no, surge de manera innecesaria al país en una lógica de exclusión de actividades económicas y de falsos dilemas (minería o medioambiente o alimentos o agua o turismo o inclusión).

La historia económica de algunos países permite concluir que el origen de industrias más especializadas y de mayor contenido tecnológico partió de las rentas mineras generadas a través de la exportación de materias primas (casos de Australia, Suecia, Brasil y Chile). Países como Alemania, EE.UU., Suecia, se desarrollaron a través del aprovechamiento de sus recursos naturales. Alemania sigue explotando lignito a cielo abierto con procesos ordenados y consensuados de reasentamiento. ¿Por qué Colombia debe privarse de esta oportunidad de desarrollo? ■